

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintidós (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por DIANA JACKELINE RESTREPO VÉLEZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-003-2019-00450-01).

ANTECEDENTES

La demandante pretende la declaratoria por vía judicial del derecho que le asiste a la pensión de invalidez con aplicación de las prerrogativas contenidas en el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como sustento de lo anterior, comentó lo siguiente: Laboró para el sector privado cotizando al ISS, teniendo como último empleador a almacenes Éxito. Por padecimientos de índole físicos fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 52.25% con fecha de estructuración del 23 de agosto

de 1991. Radicó ante Colpensiones solicitud de pensión de invalidez la que fue negada por Resolución SUB152695 del 14 de junio de 2019 en razón de no cumplir los requisitos enlistados en el Decreto 758 de 1990, frente a lo cual presentó los recursos de ley para obtener aplicación de la Ley 100 de 1993 original.

COLPENSIONES, al dar respuesta al libelo aceptó la mayoría de los hechos advirtiendo traducirse en apreciaciones personales las relativas al cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Como medios exceptivos propuso los que denominó inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez y su retroactivo, prescripción, pago, compensación, buena fe de Colpensiones e imposibilidad de condena en costas.

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín en cumplimiento del Acuerdo N° CSJANTA 21-16 del 24 de febrero de 2021 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia remitió el proceso para que se continuara su trámite de parte del Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, dependencia judicial que avocó su conocimiento por auto del 06 de julio de 2021 y en sentencia del 15 de julio de 2021, DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez. ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda. Y CONDENÓ en costas a la demandante, fijando por agencias en derecho la suma de 1 SMLMV.

El representante judicial de la demandante solicita la revocatoria de la sentencia advirtiendo la posibilidad que se trate de una enfermedad crónica, congénita o degenerativa conforme al aparte 5.1 del dictamen pericial, que permita el análisis bajo la teoría de la capacidad residual en razón de contar la demandante con una fecha de estructuración que data de 1991 y pese a ello continuar laborando.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Corporación restringirá su estudio al punto objeto de apelación planteado por el impugnante, al tenor de las directrices procesales que dictan las normas que regulan el asunto, y que en síntesis apuntan a dar por acreditado que la actora tiene derecho a la pensión de invalidez en el sendero de la tesis de la capacidad residual.

Previo a resolver lo que corresponde, importa resaltar que en el presente evento, se encuentra por fuera de discusión la condición de inválida de la demandante bajo los presupuestos del artículo 38 de la Ley 100 de 1993 en virtud a la calificación que fue realizada por Asalud, entidad que otorgó un 52.25% de PCL, con fecha de estructuración del 23 de agosto de 1991 (fls. 16-21); cuya afiliación a Colpensiones dio lugar a la cotización de 137.71 semanas entre el 01 de noviembre de 1989 y el 31 de marzo de 2018, con las cuales no alcanza los requisitos enlistados en el artículo 6° del Decreto 758 de 1990, aplicable en virtud de ser la normatividad vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada -teoría del hecho causante-.

Lo anterior, pone en evidencia, que el debate se centra en establecer si hay lugar a tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración, para el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo la postura jurisprudencial relativa a la capacidad residual, y en caso positivo determinar, la fecha a partir de la cual, procede el pago de la prestación.

Sobre esa materia, el criterio reiterado de la alta corporación es que por regla general, *“el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de la invalidez”* (CSJ SL409-2020, SL2204-2019 y SL938-2019).

No obstante, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral ha planteado una excepción a la regla general para los eventos en que la pérdida de la capacidad laboral proviene de una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, variando su postura respecto del momento a partir del cual se contabiliza el número de cotizaciones y, por lo tanto señalando que *“la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de conceder u otorgar oportunamente las prestaciones económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia”* (CSJ SL472-2020).

Así, la Alta Corporación insistentemente ha previsto para estos padecimientos crónicos, congénitos y progresivos que, el parámetro para determinar la asunción de los presupuestos legales es distinto, en tanto el padecimiento ocasiona que la fuerza laboral se mengüe con el tiempo y, por lo tanto, le permite a la persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea de tal magnitud que le impida, de manera cierta, llevar a cabo una labor. Esa excepción se justifica entonces en que la data de estructuración fijada en el dictamen es errada, pues no coincide realmente con el momento en que la persona llega a la pérdida mínima en el sistema (50%), existiendo eventos en los que la data de estructuración de la invalidez no debe tenerse como aquella en que se evidenció la enfermedad o el primer síntoma, debiendo auscultarse la fecha más cercana a la fijada por los calificadores, en la que se verifique que efectivamente se llegó a la condición de invalidez en forma permanente y definitiva (Ver SL4178-2020).

En ese rumbo, es dable tener en cuenta no solo la fecha en que se estructura la invalidez (regla general), sino también *“(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando”*. (CSJ SL3275-2019, SL4567-2019, SL4178-2020, SL4346-2020, SL1002-2020, SI5023-2021, SL2194-2022, entre otras).

En este asunto, según se extrae de la experticia de pérdida de capacidad laboral (fls. 16-21), la demandante presentó una enfermedad cerebrovascular, no especificada desde sus 22 años de edad sin causa definida, que le generó déficit neurológico con parresia de extremidades derechas, cuyo cuadro fue catalogado como irreversible, dejando por secuelas trastornos de postura y marcha, disfunción de una extremidad superior por alteración del SNC, trastornos de postura y marcha y disfunción de una extremidad superior por alteración del SNC.

Con miras a realizar una labor exhaustiva de verificación de las condiciones que provocaron la invalidez de la afiliada a fin de establecer con la mayor exactitud posible la enfermedad que dio lugar a la invalidez conforme a los argumentos de la alzada y a la invitación que en providencias como la SL4178-2020 se ha pregonado, se tiene que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los defectos congénitos son anomalías estructurales o funcionales, como los trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida; las enfermedades degenerativas según la doctrina son aquellas *“donde poco a poco la persona va perdiendo sus funciones vitales”* (Ver SL4178-2020), y las enfermedades de tipo crónico son de larga duración y progresión generalmente lenta, y se catalogan como una patología para la cual *“aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico*

¹ <https://www.tuasaude.com/es/c/enfermedades-degenerativas/>

consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, mediante el consumo constante de fármacos”, encajando en este grupo las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes (Ver SL2772-2021).

A su vez, la enfermedad o accidente cerebrovascular según la OMS es un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración, significando ello en términos más corrientes, que sucede cuando se interrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él.

Se trata entonces de un “*accidente*” que como su nombre mismo lo indica, se presenta de manera súbita o repentina, concluyendo la Corte Suprema de Justicia en análisis de contornos fácticos parecidos al que nos ocupa, que las características del accidente cerebrovascular “*dista del concepto de crónico o degenerativo que representan enfermedades de larga duración y con progresión, en la mayoría de casos lenta, que es lo que precisamente evidencia que la persona, aun cuando tiene un diagnóstico específico, tiene capacidad laboral que le permite continuar como trabajador activo*” (Ver SL2627-2021).

Tal apreciación resulta de plena aplicación al asunto, en tanto el evento patológico que presentó la actora cuando contaba con 22 años el 23 de agosto de 1991, fue imprevisto e inesperado, con rasgos que lo imponen dentro de la regla general por no encontrarnos ante una enfermedad del tipo de las degenerativas, crónicas o congénitas, dado que no se presentó desde el nacimiento ni es de larga duración o con agravamiento de manera paulatina, resultando improbable atender las condiciones específicas de la solicitante y de la patología padecida para arribar a determinación opuesta, pues omitió la parte interesada presentar su historial clínico que se constituye

para estos eventos en la documental técnica e idónea para la verificación de la evolución de la enfermedad, la aparición de secuelas y la calificación que los profesionales de la salud han otorgado a su diagnóstico con relación a su modo de vida, la condición social, y las condiciones de trabajo, información sin la cual torna en desacertado estudiar el asunto a la luz de la excepción a la regla general.

En esa línea, aun cuando la historia laboral de la afiliada da cuenta que continuó con su actividad de trabajo, pese a que la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado desde antes, pues fueron registradas cotizaciones como empleada dependiente hasta febrero de 1997 (fls. 22-24), no es dable, en el caso concreto, la contabilización de las semanas cotizadas con posterioridad a la calenda de estructuración, pues ello es permitido bajo la tesis de la capacidad residual, cuyas reglas al no ser absolutas no lo permiten bajo panoramas donde la causa de la invalidez como es el caso, se deba a una enfermedad que no encaja dentro de las patologías exceptuadas, lo que conlleva a que la sentencia apelada sea confirmada.


Conforme a lo preceptuado en el artículo 365-3 del CGP, las costas de segunda instancia estarán a cargo de la demandante, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA**, la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocidas. Las costas de segunda instancia son a cargo de

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ)

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310500320190045001
Proceso: Ordinario
Demandante: DIANA JAKELINE RESTREPO VELEZ
Demandado: COLPENSIONES
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 26/08/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario